



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

Proceso	Acción Popular
Demandante	Bernardo Abel Hoyos Martínez
Demandado	María Isabel de San Martín Correa Ochoa
Decisión	Confirma parcialmente sentencia
Radicado	05001-31-03-007-2019-00258-01

Medellín, dieciocho de febrero de dos mil veintidós.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia proferida el 05 de noviembre de 2021 por el Juzgado 007 Civil del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

1. DEMANDA. Bernardo Abel Hoyos Martínez promovió acción popular frente a María Isabel de San Martín Correa Ochoa -propietaria del establecimiento de comercio Mansión Polo, ubicado en la Transversal 39B N° 74-28 de Medellín-, con el fin de que se protegiera los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, con fundamento en que la publicidad exterior visual ubicada en el establecimiento en mención, no reúne los requisitos previstos en la Ley 140 de 1994 y en las demás normas locales reglamentarias.

2. TRÁMITE. El Juzgado 007 Civil del Circuito de Medellín avocó conocimiento del asunto y dispuso la notificación a la demandada, libró las comunicaciones respectivas a la Alcaldía de Medellín, al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo, al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y dispuso la publicación del aviso de prensa destinado a enterar del trámite a los miembros de la comunidad.

3. CONTESTACIÓN.

3.1. La demandada María Isabel de San Martín Correa Ochoa, notificada en forma personal el 03 de julio de 2019, guardó silencio al respecto.

3.2. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por medio de apoderado judicial, expuso que, para el caso específico de publicidad exterior visual, la autoridad competente para conocer de esas funciones ambientales está en cabeza de los entes territoriales, conforme lo dispone la Ley 190 de 1994 y la Ley 1801 de 2016.

3.3. Los demás vinculados guardaron silencio.

4. SENTENCIA. El Juzgado 007 Civil del Circuito de Medellín profirió sentencia el 05 de noviembre de 2021, mediante la cual declaró la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que en el trámite cesó la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda. En efecto, el juez expuso que según dictamen rendido el 20 de octubre de 2021 por la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín, se constató que la publicidad que fue objeto de la queja constitucional, ubicada en la transversal 39B No. 74-28 de Medellín, fue desmontada, por lo que tal entidad emitió *"constancia de publicidad exterior visual no instalada"*.

Asimismo, el juzgador de primera instancia anotó que, si bien el artículo 27 de la Ley 472 de 1998 establece que la aprobación del pacto de cumplimiento se surte mediante sentencia, nada obstaba para declarar la carencia actual de objeto, debido a que se verificó que lo pactado en ese momento se satisfizo, y en todo caso, la vulneración advertida por parte del gestor de la acción popular cesó. Ordenó expedir copia de la sentencia con destino a la Defensoría del Pueblo para los fines previstos en el art. 80 de la Ley 472 de 1998 y no impuso condena en costas.

5. APELACIÓN. Inconforme con esa decisión, la parte demandante apeló y en el escrito presentado con dicha finalidad, expuso que la decisión de primera instancia constituye una vía de hecho porque no contempla las normas de obligatoria aplicación, como son las relativas a la condena en costas y la fijación

de agencias en derecho. De la sentencia SU 15001333300720170003601 del Consejo de Estado trajo a consideración los apartes atinentes a que las tarifas de agencias en derecho en las acciones populares, deben estar en los rangos fijados para los procesos declarativos y que *"siempre hay lugar a reconocerlas a favor del actor popular que resulta victorioso"*. Además, mencionó el art. 2 del Acuerdo PSAA16 -10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, relativo a los criterios para la fijación de dichas agencias; el 2360 del C. Civil, que en cuanto a las costas por acciones populares establece que el demandante será indemnizado de todas las costas de la acción si se declarare fundada; el 361 y el 366 del CGP sobre la composición y liquidación de las costas; al igual que el art. 153 de la ley 270 de 1996, referente al deber de los funcionarios de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

6. ALEGACIONES EN ESTA INSTANCIA.

6.1. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante apoderado judicial, insistió en que dicha entidad no es la autoridad pública encargada de la protección de los supuestos derechos colectivos conculcados y, en especial, no es la encargada de hacer control a la publicidad exterior visual.

6.2. Los demás intervinientes en el trámite constitucional, guardaron silencio al respecto.

CONSIDERACIONES

1. PROBLEMA JURÍDICO. En atención al recurso interpuesto, a la Sala le corresponde decidir si en la sentencia de primer grado había lugar a la imposición de condena en costas a la parte demandada porque la situación que dio lugar a la vulneración de los derechos colectivos denunciada, cesó en el curso del proceso, es decir, debido a la interposición de la demanda constitucional.

2. MARCO JURISPRUDENCIAL Y NORMATIVO DE LA DECISIÓN Y CASO EN CONCRETO.

2.1. La acción popular es un mecanismo jurisdiccional para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza, cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por un ente público o por un particular (artículo 88 de la Constitución Política y Ley 472 de 1998).

De conformidad con el artículo 2º de la Ley 472 de 1998, el objeto de la pretensión popular es que se imponga una conducta específica al demandado –incluso omisiva – a fin de *“evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”*

2.2. A su vez, el artículo 9º ibídem, dispone:

“Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos”.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que los presupuestos sustanciales necesarios para la prosperidad de la acción popular, son:

“A) Una acción u omisión de la parte demandada. B) Un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y C) La relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses”¹.

2.3. El impugnante cuestiona la sentencia de primera instancia, frente al ordinal tercero de la parte resolutive en que el juez dispuso: “Sin condena en costas en esta instancia” y enfatiza que de acuerdo con lo que en el proceso ocurrió, el juez debía imponer la condena y en consecuencia fijar el monto de las agencias en derecho.

2.4. Al respecto, el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, prescribe:

¹ Sentencia de 30 de junio de 2011, Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP), C.P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

"El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar".

En la providencia que ahora es objeto de alzada- el juez resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado, en virtud a que en el trámite procesal cesó la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda.

SEGUNDO: EXPEDIR copia de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo, para los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

2.5. Mediante el ejercicio oportuno del recurso de apelación, el demandante pretende se imponga a la demandada y a favor de él, la condena en costas como consecuencia de la gestión que adelantó. Al respecto, la Sala advierte que en el expediente está acreditado en efecto el accionante acudió a la jurisdicción para denunciar una situación de transgresión de derechos colectivos, basada en omisiones respecto de las cuales, en el marco del proceso fue acreditado que cesaron; y lo cierto es que así ocurrió varios meses después de que la demandada fue notificada de la pretensión constitucional esgrimida frente a ella y pocos días antes de la celebración de la diligencia de pacto de cumplimiento, en que el juez determinó que se haría la visita para que la autoridad municipal verificara si la situación denunciada fue corregida.

En este caso, se está en presencia de un hecho superado al que en efecto dio lugar la gestión procesal adelantada que movió a la accionada a eliminar la causa de la acción. De manera que el logro de protección del derecho colectivo a raíz del proceso da lugar al reconocimiento de costas reclamado por el accionante, como este Tribunal ha determinado en otras decisiones² en que ha resuelto la censura a sentencias que en iguales circunstancias, han negado

² Acción popular. Sentencia de 25 de mayo de 2018. Radicado 05001-31-03-008-2013-00783-01

dicho reconocimiento. Así debe ser porque en el expediente que ahora se resuelve, fue acreditado lo siguiente:

- La demanda fue presentada el 09 de mayo de 2019 -en contra de la propietaria del establecimiento de comercio Mansión Polo, ubicado en la Transversal 39B N° 74-28 de Medellín-, y con ella el demandante aportó imágenes que daban cuenta de la publicidad alusiva al establecimiento de comercio en mención, que calificó de afectar los derechos colectivos por no estar ajustada a los requisitos previstos en la Ley 140 de 1994 ni a las demás reglamentaciones locales.

-La demandada María Isabel de San Martín Correa Ochoa, fue notificada el 03 de julio de 2019 y la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín, allegó informe de visita técnica -de fecha 24 de julio de 2019 -acerca del elemento publicitario aquí cuestionado, en el que emitió concepto negativo por cuanto los avisos publicitarios ubicados en el establecimiento de comercio Mansión Polo, incumplían lo establecido en el Decreto Municipal 0288 de 2018, por el cual se reglamentan los avisos publicitarios en Medellín.

-Luego, el 27 de noviembre de 2020, fecha en la cual se celebró la audiencia de pacto de cumplimiento, la demandada afirmó que ocho días antes a esa diligencia, desmontó los avisos publicitarios atacados debido a la interposición de la acción popular, lo cual fue confirmado por el gestor de la acción popular, quien confirmó que el establecimiento de comercio Mansión Polo ya no contaba con publicidad exterior visual que excediera los límites legales y solicitó que mediante sentencia se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado. No obstante, el juez *a quo*, en aras de verificar tales afirmaciones, requirió a la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín para que hiciera la visita técnica pertinente, quien, mediante informe de 21 de octubre de 2021, puso en conocimiento que mediante visitas de 08 de julio y 20 de octubre de 2021, se constató que no había publicidad exterior visual instalada en el establecimiento de comercio Mansión Polo, ubicado en la Transversal 39B N° 74-28 de Medellín

3. En tal orden, el Tribunal encuentra que la ocurrencia del hecho superado que llevó al cese de la contaminación visual provocada por la publicidad

exterior, obedece a la acción judicial instaurada y conocida por la demandada, quien así lo informó en la audiencia, de modo que el demandante, quien logró lo pretendido en el proceso, tiene derecho al reconocimiento de las costas en su favor.

4. En conclusión, la Sala advierte que al estar acreditado que la vulneración a los derechos colectivos cesó debido a la interposición de la acción constitucional³ y que, además, se comprobó una debida vigilancia del proceso por parte del demandante, -lo cual se aprecia durante el trámite constitucional, en tanto fue diligente al informar tanto sobre la vulneración de los derechos, como sobre la cesación de la misma debido a su gestión-, hay lugar a condenar en costas a la parte demandada y, por tanto, el ordinal "TERCERO" de la sentencia impugnada, será revocado para, en su lugar, disponer la condena en costas de primera instancia en contra de la parte demandada y a favor del demandante. Las agencias en derecho serán fijadas por el *a-quo*. En lo demás, la sentencia de primera instancia quedará incólume.

5. Las Costas en esta instancia se impondrán a favor de la parte recurrente y a cargo de la accionada a quien es desfavorable la decisión (art. 365 numeral 1, CGP).

DECISIÓN

Por lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida el 05 de noviembre de 2021 por el Juzgado 007 Civil del Circuito de Medellín y, en su lugar, se impone condena en costas en primera instancia. Las agencias en derecho serán fijadas por el *a quo*.

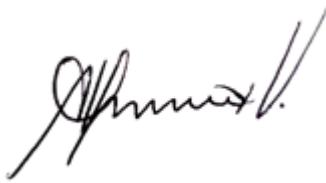
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.

³ CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia de 12 de mayo de 2016, rad. 68001-23-31-000-2010-00720-02.

TERCERO. Costas en esta instancia a cargo de la parte accionada y a favor del accionante. Por concepto de agencias en derecho se fija un valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (Acuerdo PSAA16-1054 del Consejo Superior de la Judicatura).

NOTIFÍQUESE

Los magistrados,



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN